

La jornada del 7 de noviembre

Argentina: nuevo protagonismo de la clase obrera

Eduardo Parral/II y último

Si analizamos brevemente la trayectoria de la resistencia antidictatorial argentina veremos que se mantuvo una actividad huelguística y de protesta casi permanente, pero de carácter estrictamente defensivo hasta 1978. Para esas fechas, la ola de paros por mejoras económicas que culminó con la exitosa huelga ferroviaria y obligó por primera vez al ministro de Economía, Martínez de Hoz, a otorgar un reajuste salarial considerable, marcó un giro de la situación. Desde ese momento comenzó a medirse en las filas obreras la posibilidad de enfrentamientos más globales e intransigentes. Durante esta fase, que incluye las jornadas de protesta de mediados de 1979, del 22 de julio pasado y la del 7 de noviembre, continuaron desarrollándose con variable intensidad una serie de conflictos parciales, por zonas, gremios y fábricas, que, sin alcanzar una dimensión nacional, mantuvieron presente el rechazo de los trabajadores a la política oficial.

Este paulatino crecimiento de la resistencia se produce en condiciones especialmente desfavorables para los trabajadores. A la eliminación de sus dirigentes y activistas, al congelamiento de la vida política y sindical la caída brutal del salario a la mitad de su valor, se añadió en 1981 una ola sin precedentes de quiebras y cierres de empresas que incrementó la desocupación a índices sólo alcanzados durante la histórica crisis del 30.

En un contexto económico recesivo, como se sabe, el poder de la huelga y de otras medidas de lucha que afectan la producción —armas tradicionales de la clase trabajadora— pierde su eficacia. Pasan a primer plano, en cambio, las preocupaciones ligadas a la preservación de la fuente de trabajo, al tiempo que se incrementa la presión de los desempleados como masa de maniobra patronal para romper los conflictos. Hoy en Argentina no es raro ver a direcciones sindicales auténticamente representativas de sus bases (direcciones de fábrica, de empresas y hasta de regionales) que prefieren limi-

tar postergadas demandas salariales (es decir, aceptar la reducción de las remuneraciones reales) antes que forzar situaciones que podrían conducir al cierre de las plantas a las suspensiones o a los despidos masivos.

El deterioro de las condiciones de lucha del proletariado argentino se completa con el descenso de su importancia numérica (un millón y medio menos de trabajadores desde el golpe) y de su peso como sector productivo (determinado por la enorme depresión industrial), así como con la destrucción definitiva de sectores pequeños y medianos de la industria y del comercio locales que constituyeron ocasionalmente, en las últimas décadas, importantes aliados coyunturales frente a la presión de los grandes monopolios imperialistas.

La jornada del 7 de noviembre — con su marcha de protesta contra el hambre y la desocupación — adquiere así una dimensión opositora *combativa* que parece marcar el pasaje de una resistencia defensiva a una resistencia activa a la dictadura. Al encabezarla, todavía de una manera algo paralela y desfasada del resto del cuerpo social (en el que se destaca la lucha del frente cultural, de los familiares de desaparecidos y de algunos sectores estudiantiles), la clase obrera asume una responsabilidad práctica inédita. Tanto por el carácter estratégico de los planes de la actual dictadura militar como por lo que de ellos ya se ha llevado a la práctica, el rol político de la clase obrera argentina se enmarca dentro de un contexto claramente diferenciado de anteriores experiencias de lucha contra regímenes militares.

Los cambios prácticamente irreversibles generados en la estructura socioeconómica poseen inegables repercusiones políticas. Uno de sus efectos es la pauperización y marginación de vastas capas medias y pequeñas del empresariado local ligado al mercado interno. Tales capas medias en proceso

de rápida extinción constituyeron durante décadas un aliado coyuntural concreto, un colchón de seguridad o escudo de la clase obrera. Juntos derrocaron gobiernos, hicieron inocuas las proscripciones electorales, obligaron al retorno del peronismo al poder y jaquearon una y otra vez a las fuerzas más reaccionarias de la clase dominante.

Se trataba de una Argentina diferente, donde era importante mantener y aumentar la producción industrial para el consumo interno, donde la burguesía local tenía programas y propuestas globales que no se habían visto definitivamente neutralizadas por la nueva configuración del mercado capitalista mundial, donde en el plano interno era viable seguir postulando un desarrollo económico que se basara en un cambio radical de las estructuras básicas.

Es en tales condiciones desfavorables que la clase trabajadora debe encarar la tarea de encabezar un amplio frente antidictatorial como todos los sectores populares del país. La debilidad de las fuerzas para emprender el camino es inocultable, pero el hecho de que la protesta contra la dictadura se generalice, desde los estadios de fútbol hasta los festivales de música popular, las salas teatrales, el humor gráfico, etcétera, asegura un buen caldo de cultivo.

Para formular una opción válida los trabajadores tendrán que plantear los problemas y las aspiraciones de sus potenciales aliados de las capas medias. Ningún problema (por ejemplo el de la represión a la cultura o el de los desaparecidos) puede ser dejado sólo a los directores afectados, porque es preciso poner en marcha un heterogéneo conglomerado antidictatorial.

El objetivo político global será impedir la consolidación definitiva de la Argentina granburguesa mediante la lucha por una democracia de masas y transicional, por una democracia burguesa cuya inestabilidad sea garantía de su dinamismo en el pasaje hacia formas más altas de soberanía popular.